

JOSÉ LUIS CARBAJO
Director Ejecutivo
de TAREA

Inclusión social con reconocimiento

La propuesta de inclusión social del Gobierno se ubica frente a desafíos políticos de integración en una sociedad pluricultural como la nuestra. Su apuesta por aminorar el nivel de desigualdad social y económica de los peruanos, en especial de los más pobres, debe ir acompañada del reconocimiento de la persona como sujeto que tiene voluntad e inteligencia para atender sus problemas y apuestas, y no simplemente como alguien manipulable por grupos radicales o terceros, que es como se lo concibe en los conflictos sociales.

Este reconocimiento debe hacerse además extensivo a las comunidades andinas y amazónicas y sus derechos colectivos; y debe sustentarse en el respeto de la diferencia y en la convicción de la existencia de diversas racionalidades, expresadas por ejemplo en distintas visiones de desarrollo —que pueden no necesariamente coincidir con la occidental—, perspectivas que con su diversidad cultural sobre la vida, el trabajo y el buen vivir aportan al desarrollo del país y enriquecen nuestra nación multicultural.

En virtud de que sin este reconocimiento no habrá inclusión social, nos parece importante el anuncio presidencial del 28 de julio sobre el Proyecto de Reforma Constitucional para incorporar en la Carta Magna el derecho fundamental al agua, así como la propuesta de ordenamiento territorial, que dé inicio a un proceso mediante el cual se oriente la ocupación y utilización del territorio, delimitando el uso del espacio para la ganadería, la agricultura y las actividades extractivas. Esto permitirá tener una visión integral del territorio y atender las demandas y el derecho de los pueblos a decidir sobre el tipo de desarrollo al que aspiran, así como hará posible concertar a través del diálogo en asuntos claves para nuestra sobrevivencia como especie humana: los recursos naturales, el deterioro ambiental y la escasez de agua.

Otra política que aporta al reconocimiento es la de una educación de calidad para todos y todas. Tenemos todavía un sistema educativo que lesiona la autoestima de nuestros estudiantes, que no promueve una convivencia democrática, que no estimula la

autorrealización intelectual y práctica de la persona para potenciar su aporte con su entorno inmediato y el país. Necesitamos mirarnos como diferentes y valorar esta diversidad para reconocernos con respeto, entre individuos y como colectivos. La educación puede ayudar a encontrar pistas para la integración y el reconocimiento. Por ello, consideramos fundamental la prioridad otorgada a la Educación Intercultural Bilingüe —en las políticas del sector y en el anuncio presidencial— para atender a la población andina y amazónica en su cultura y lengua, aunque lo deseable sería avanzar en una propuesta intercultural para todas las escuelas del Perú.

El rol del docente es clave en esta búsqueda de reconocimiento con inclusión social en los aprendizajes de niños y niñas: su desempeño en el aula hace la diferencia en los resultados de aprendizajes, que no son solo matemática y comunicación, sino también ciudadanía y cultura para el trabajo. Valorar al docente en su condición de profesional de la educación y como ciudadano, padre o madre de familia que necesita ingresos dignos para atender sus necesidades básicas, es fundamental como política de Estado. Por ello tenemos muchas expectativas en la Nueva Ley de Desarrollo Docente que será presentada al Congreso; según lo anunciado, se espera que incorpore mejoras remunerativas, considere una lógica meritocrática, proponga la evaluación del desempeño, cambios hacia un sistema descentralizado de formación docente, y que estimule la innovación.

Si bien el Presidente ha apostado por la inclusión social y tiene en marcha un conjunto de iniciativas para atender la pobreza y la desigualdad de oportunidades, el balance entre el reconocimiento de las demandas y las políticas del Estado para las poblaciones andinas y amazónicas es todavía muy deficitario en contra de estas últimas. Tiene que romper con la dicotomía de un discurso que busca la justicia y la equidad para todos, en especial de los más pobres, con una práctica política, de confrontación, con ideas hegemónicas en la gestión de un Gobierno que ha abierto heridas históricas de injusticia y esperanzas postergadas para ganar las elecciones del país.